

C. Promotor fiscal y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que no está en las facultades del Juzgado de Distrito ante quien se interpone el recurso de amparo, "averiguar si en realidad se cometió ó nó el delito de que se acusa al quejoso, sino solamente si con los procedimientos reclamados se infringe alguna garantía constitucional: que por lo mismo el Juez del Estado puede obrar libremente dentro de los límites de las leyes comunes, contra el C. Rodríguez, para averiguar el delito de que este está acusado; por estos fundamentos es de reprobarse y se reprueba la sentencia que declaró, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Antonio Rodríguez, y se declara, que la Justicia de la Union no ampara ni protege á dicho ciudadano contra los actos de que se queja.

Devuélvanse estas actuaciones acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron:—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*J. J. de la Garza.*—*J. Artaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velásquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 18 de 1875.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

DÍLIGENCIAS

Practicadas en el Tribunal de Circuito de Puebla, con motivo de la suspensión de los Jueces propietario de Distrito de Oaxaca, y primer suplente, dictada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Pedimento del C. promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

Ciudadano Magistrado de Circuito.

En el dictamen de la respetable comisión de la Corte Suprema de Justicia, se registra á fojas 17 y 30 vuelta de este expediente, que fué desde luego aprobado por el ilustrado C. Presidente de ella conforme á la ley, y autorizado por el Ministro menos antiguo, en ese dictamen digo: está la historia perfectamente empendiada del negocio que va á ocupar la recta atención de vd., con todos los considerandos que han sido necesarios para haber declarado suspensos en el ejercicio de su empleo, á los jueces propietario y primer suplente de Distrito de Oaxaca, por la extralimitación de facultades en los respectivos juicios de amparo de que conocieron, promovidos por los miembros del Congreso de aquel Estado.

Esa extralimitación, bastante bien explicada en el dictamen referido, subsiste aún bajo el mismo caracter con que fué reprobado por la Suprema Corte: nada ha habido nuevo que la haga cambiar en su esencia, ni en sus accidentes ante el justificado Tribunal que vd. preside; en consecuencia, para solo el efecto de dar cumplimiento á lo dispuesto en la fac. 7ª del art. 2º del capítulo 3º de la ley de 29 de Julio de 1862, resta que vd. se sirva ratificar la suspensión de los funcionarios de que he hecho mérito, que está ya decretada por autoridad competente, para que el juicio de responsabili-

dad continúe sus tramites, y en estado se resuelva lo conveniente.

Tonga vd. á bien C. Magistrado así determinar, como se lo pide el suscrito Promotor, salvo su mejor parecer.

Zaragoza, Noviembre 20 de 1874.—*S. Sanchez.*—Una rúbrica.

Puebla de Zaragoza, 7 de Enero de 1875.—*S. Sanchez.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Vista la queja interpuesta por el C. Miguel Castro, Gobernador que fué del Estado de Oaxaca, contra los procedimientos del Juez de Distrito, en el juicio de amparo que promovieron los CC. Lics. José E. Castro, Roberto Maquco, Lic. Antonio Prado, Dr. Estéban Calderon, Manuel S. Posada, Dr. Francisco Valverde, Mariano Carrizos, y Lic. Juan Escobar, diputados propietarios de aquella Legislatura, por considerar que el auto que decretó aquel funcionario mandando suspender los efectos del decreto expedido por la Diputacion permanente, el 23 de Setiembre próximo pasado, atacaba la soberanía del Estado. Visto el dictámen de la comision á que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion sometió al exámen de este negocio, así como el del Juez primer suplente de Distrito que dió entrada al amparo promovido por diez Diputados propietarios y suplentes á la misma Legislatura, contra la providencia dictada por el juez propietarios mandando suspender el acto reclamado; el acuerdo supremo que recayó ordenando la suspension y consignacion de ambos funcionarios á este Tribunal para los efectos y en los términos de la frac. 7ª art. 2º cap. 3º del reglamento de 29 de Julio de 1862; los informes que produjeron los interesados; el parecer fiscal con todo lo demas que ver convino; y apareciendo de los datos que obran en este expediente, que la causa que dió origen á que se interpusieran aquellos recursos, fué

la cuestion que surgió entre una mayoría, y la minoría de los Diputados de la Legislatura, en la junta preparatoria habida el 2 de Setiembre último, de la cual resultó: que el ejecutivo del Estado no reconoció mision legal en aquella mayoría, é impidió, haciendo uso de la fuerza armada, que la Legislatura se reuniera el dia 16 del mes citado, conforme al art. 28 de la Constitucion particular, y que esa mayoría compuesta de nueve diputados propietarios y un suplente se reunió en otro lugar y en cumplimiento del artículo citado, declaró abierto el 2º período de sesiones ordinarias: que la Diputacion permanente, compuesta de diputados de la minoría, continuó funcionando, y el 23 del mismo Setiembre convocó al Congreso á sesiones extraordinarias para solo el efecto de ratificar los méritos y resolver lo conveniente sobre la acusacion interpuesta contra los ocho diputados antes dichos, por el delito de suspension de facultades ajenas, llamando para completar el quorum, á los suplentes de estos á quienes declaró impedidos para deliberar en su propia causa: que los diputados propietarios promovieron el recurso de amparo contra esta disposicion y la suspension del acto reclamado ante el juez propietario, por considerar violadas en sus personas las garantías que otorgan los arts. 14, 16 y 21 de la Constitucion federal, y este funcionario proveyó de conformidad con la solicitud, haciéndose la notificacion del acto suspensivo al Gobernador del Estado, que no obedeció: que los otros seis diputados ocurrieron al juez primer suplente, promoviendo amparo contra la disposicion dictada por el propietario y la suspension del acto reclamado, por considerar que atacaba la soberanía del Estado, y el expresado juez resolvió de conformidad, haciéndose la respectiva notificacion al propietario, quien contestó: que el recurso no procedía y que solo habia lugar á la responsabilidad.

Considerando primero: Que si bien la Diputacion permanente durante el receso

del Congreso, está facultada por el art. 50 de la Constitución local para convocarlo á sesiones extraordinarias, en el caso, habia razones fundadas para dudar por lo menos, que ejerciera legalmente esta atribucion, puesto que una mayoría de los diputados compuesta de nueve propietarios y un suplente que es mas que suficiente para formar quorum, conforme al art. 37 del mismo Código, habia declarado abierto el 2º periodo de sesiones ordinarias, desde el 16 de Setiembre, día señalado por el art. 28 de la Constitución local; que esta cuestion de legitimidad tanto de la Diputacion permanente como de la Legislatura instalada, no debia tratarse, como no se trató en el auto suspensivo, porque seria prejugarlo antes de pronunciar la resolucion definitiva, y aun en el supuesto de que la Diputacion permanente al expedir el decreto de convocacion á sesiones extraordinarias, hubiera ejercido legalmente esa atribucion, no estaba autorizada por ley alguna para declarar suspensos en el ejercicio de sus funciones á los ocho diputados peticionarios, llamando en el acto para que los sustituyeran, á sus respectivos suplentes, porque este hecho importa la imposicion de una pena que solo corresponde á la autoridad judicial, y en el presente caso al Congreso del Estado, erigido en jurado, conforme al art. 85 de la Constitución local, por lo que la Diputacion permanente al proceder en los términos en que lo verificó, violó en la persona de los peticionarios los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Federal, pues ni era el Tribunal que previamente hubiera establecido la ley, ni la autoridad competente, que previo el fundamento legal de sus procedimientos, pudiera privar á los funcionarios del ejercicio de su cargo, ni podria en fin, aplicar pena alguna, porque adonde hay derechos adquiridos por el ciudadano bajo la ley existente, no hay poder en ningun ramo del Gobierno que pueda quitárselos; pero cuando estos derechos se tienen en contra de la ley existente ó se han obtenido por su violacion, se

TOMO VII—PARTE II.

le pueden quitar no por cualquiera autoridad, sino por la aplicacion de la misma ley, por los Tribunales del Estado.

Segundo: que los ocho diputados que promovieron el amparo, acurrieron al Juez en su propio nombre y representacion, por considerar violadas en sus personas las garantías individuales que otorgan los arts. 14, 16 y 21 de la Constitución Federal, sin que pueda considerárselos con otro carácter, ya porque por el art. 37 citado se necesita para que haya Legislatura, la concurrencia de mas de la mitad del número total de los miembros que la componen, y ya porque conforme al artículo 40 de la constitucion particular, toda resolucion del Congreso, no puede tener otro carácter que el de ley, iniciativa ó acuerdo económico, firmando las dos primeras el Presidente y dos Secretarios, y el segundo solo dos Secretarios, y ya en fin, porque para ejercer libremente sus funciones la Legislatura instalada en 16 de Setiembre, y de la cual son miembros los peticionarios, habia solicitado el auxilio de que trata el art. 116 de la Constitución Federal, que le fué concedido por la ley de 17 de Octubre último.

Tercero: que concediéndose el recurso de amparo, conforme á la fraccion primera del art. 101 de la Constitución Federal, por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, es inconcuso que el recurso procede contra las leyes y actos de las autoridades de los Estados que violen dichas garantías, aun cuando esas leyes y esos actos conciernan al régimen interior de los mismos Estados, porque de otra manera vendria á ser ilusorio el precepto constitucional consignado en el art. 10 del pacto fundamental en la Nacion.

Cuarto: que respecto del C. Juez primero suplente, si bien es cierto que dió entrada al recurso intentado por los diez diputados, fundado en la fraccion 2ª del art. 101 de la Constitución Federal, tambien lo es, que en este expediente no aparece la resolucion definitiva que hubiera dictado, en

la que pudo rectificar ó reformar su opinion para que este Tribunal calificara con la debida justificacion sus procedimientos.

En atencion á lo expuesto, á los datos que nuevamente obran en este expediente, y que no tuvo á la vista la Corte Suprema de Justicia, ya por haberlos omitido en su queja el ex-Gobernador de Oaxaca, y ya por que aun no era tiempo de que fueran presentados; con fundamento de la fraccion 7ª, art. 2º, cap. 3º del Reglamento de 29 de Julio de 1862, este Tribunal declara:

Primero: que es de levantarse y se levanta la suspension impuesta al C. Juez propietario de Distrito del Estado de Oaxaca.

Segundo: librese atenta comunicacion al Ministerio de Justicia, con insercion de este decreto, para que se sirva ordenar le sea entregado al expresado funcionario el Juzgado de Distrito y se le reintegre la parte de sueldo que ha dejado de percibir desde el dos de Octubre próximo pasado.

Tercero: en atencion á los tres meses que lleva de estar suspenso en el ejercicio de su encargo el C. Juez 1º suplente de Distrito, se levanta así mismo la suspension decretada en su contra, librándose la respectiva comunicacion para que vuelva al desempeño de las funciones de su referido encargo.

Hágase saber, y si no se interpusiere recurso legal, remítanse estos autos á la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia para los efectos á que haya lugar en derecho.

El C. Lic. Fernando Barroeta, Magistrado 2º suplente en este Tribunal Superior de Circuito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Fernando Barroeta.*—*Felipe de J. Almanzan*, secretario.

Pedimento del C. fiscal. de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal interino dice: que en virtud del recurso de apelacion interpuesto por el ciudadano Promotor fiscal del Tribunal de Circuito de Puebla, contra el auto de 7 de

Enero próximo pasado, por el que el expresado Tribunal levantó la suspension impuesta á los jueces propietario y primer suplente del Juzgado de Distrito de Oaxaca, han venido para su revision en grado á ésta sala, las diligencias practicadas por el referido Tribunal.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en uso de la facultad que le confiere la fracion 7ª, art. 2º, cap. 3º del reglamento, y con acuerdo del Tribunal Pleno, ordenó la suspension del juez propietario de Distrito de Oaxaca, del primer suplente, por sus procedimientos en los juicios de amparo que promovieron ante ellos los diputados de la Legislatura del Estado, que divididos en dos fracciones, pretendieron formar respectivamente los unos, con exclusion de los otros, el poder legislativo del Estado.

Este conflicto, nacido de las encontradas pretensiones en que se dividió la Legislatura, tuvo una solucion pacífica, mediante la intervencion que tomó el Congreso de la Union, ordenando que el Gobierno General impartiera su auxilio á los diputados legítimamente instalados como Legislatura del Estado el 16 de Setiembre último. Este hecho revela de una manera inconcusa que en esa cuestion, de un carácter puramente político, debía ser extraña la intervencion de la autoridad judicial.

Los partidos contendientes, desearos de obtener el triunfo en la cuestion que los dividia, apelaron á todo género de arbitrios, entre ellos, al juicio de amparo, cuyo único objeto es mantener á los individuos en el goce de las garantías que consagra nuestra Constitucion, como derechos del hombre. Unos diputados ocurrieron al juez de Distrito propietario, solicitando amparo contra el decreto de la diputacion permanente que convocaba á la Legislatura á sesiones extraordinarias. El juez de Distrito dió entrada á este recurso, y lo que es mas, ordenó la suspension del acto reclamado; es decir, la suspension de los efectos del

decreto de convocacion. Otros diputados, los que figuraban en el bando contrario, ocurrieron al juez primer suplente de Distrito, solicitando amparo contra las providencias del juez propietario, pidiendo que ordenara la suspension de los efectos de esas mismas providencias. El juez primer suplente, dió entrada á este extraño recurso: ordenó la suspension del acto reclamado: hizo notificar ésta providencia al juez propietario, y le ordenó que rindiera el informe respectivo.

Por fortuna, no ocurrió á los primeros diputados la idea de solicitar del juez 2º suplente, amparo contra las providencias del primero; en cuyo caso, los segundos hubieran ocurrido al tercer suplente: los primeros, al juez de Distrito mas inmediato: los segundos, al primer suplente del mismo juzgado, y así sucesivamente hasta recorrer los juzgados todos de Distrito de la República, tocando el triunfo al partido al que hubiera cabido en suerte ocurrir al último suplente del juzgado de Distrito mas lejano. Por absurdo y monstruoso que esto parezca, no puede dudarse de su exactitud, una vez que se admite el principio de que puede ocurrirse en demanda de amparo contra las providencias que en un juicio de amparo decreta un juez de Distrito.

La Corte de Justicia, creyó que era necesario aplicar un correctivo eficaz á estos abusos que tienden á desvirtuar y desprestigiar una institucion que el que suscribe no vacila en calificar como la primera, la mas interesante de las instituciones liberales de la República. Nada, en efecto, mas respetable y grandioso que el juicio de amparo; nada mas importante, que ésta institucion en que la justicia federal, sin el aparato de la fuerza, modestamente, por medio de un simple auto, armada del poder moral que la Constitucion le confiere, en nombre de la soberanía nacional, hace prevalecer el derecho individual, el derecho del hombre mas oscuro, contra el poder del gobierno; lo que es mas, contra el poder

misimo de la ley, siempre que ésta, ó algun acto de aquel, vulneran los derechos del hombre. Esos derechos que la Constitucion no otorga ni cria, sino que simplemente reconoce y sanciona, cuyo goce asegura, no á los ciudadanos ni á los mexicanos, sino á todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, su edad, su profesion, su origen ó nacionalidad, su fortuna ó condicion social, no son los derechos de los diputados, ni de los gobernadores, ni de los funcionarios públicos, ni de los ciudadanos, considerados bajo éstos respectos; son simplemente los derechos que la naturaleza dió á todos los hombres, á todos los individuos de la especie humana, á quienes, sin distincion de razas ni de climas, dió los mismos instintos, las propias necesidades, é impuso idénticos deberes.

Nuestra Constitucion, reconociendo y acatando estos derechos, y garantizando su goce tranquilo y perfecto á todos los hombres, se eleva sobre la generalidad de las constituciones políticas. Proclama la libertad individual sobre todos los poderes sociales, la protege contra todas las tiranías, quebranta la terrible ley de las mayorías, haciendo prevalecer el derecho de uno solo, contra la voluntad de todos: ésta voluntad, por uniforme que sea, no constituirá derecho, cuando viola el derecho de un individuo; constituirá la fuerza, el poder de todos, que por terrible que se suponga, se embotaría contra el derecho individual, modestamente refugiado en el juicio de amparo, bajo la proteccion de la justicia federal.

Hé aquí cómo comprendo esta institucion, que he llamado la primera de nuestras instituciones. Como institucion política, ha protegido los derechos de los vencidos, llamándolos á la comunidad democrática, proclamada por los vencedores; como institucion judicial, hace prevalecer sobre la ley escrita, la ley de la naturaleza; como institucion humanitaria, abre á todos las puertas de la República, ofreciendo un asilo seguro, un refugio inviolable

contra todas las tiranías, contra todo poder exclusivista, contra todos los abusos de la intolerancia política ó religiosa.

Bajo estos aspectos, nuestro juicio de amparo aventaja á las instituciones de aquellos pueblos que, en un órden práctico, han conseguido la mas perfecta realizacion de la libertad individual. Nada tenemos que envidiar, con relacion á ésta materia, á la ley de *Habeas Corpus*, en sus múltiples y variadas formas, de los ingleses; nada á las instituciones fundamentales de la democracia americana. En cualquier punto de la República, en donde la ley ó la administracion vulneran el derecho de un hombre, está pronta y expedita la justicia federal para ampararlo y protegerlo. Su libertad individual, su vida, sus tesoros ó los harapos que mal encubren su desnudez, todo lo que dice relacion á sus derechos como hombre, está bajo la salvaguardia protectora de la ley de amparo. La justicia federal, para otorgarlo al quejoso, no le pregunta por su nacionalidad; no inquiere su edad, ni atiende á su sexo; no le pregunta por su modo de ser en la sociedad; no le pide su credencial de diputado, su nombramiento de juez, ni la constancia del registro civil que acredite que es casado ó célibe, mayor ó menor de edad, padre ó hijo de familia; lo basta que sea un hombre, un individuo de la especie humana, que se encuentra, aunque accidentalmente, en el territorio de la República, y que mediante ésta circunstancia, y bajo aquel único carácter, tiene derecho á que no se le perturbe en el goce de sus garantías individuales.

Todo derecho consagrado por la ley, constituye una garantía; pero aquellos derechos, en sus mil variadas formas, dan origen á garantías tambien de diferente especie. Así, hay garantías políticas, garantías civiles, garantías en el órden doméstico ó familiar. El diputado electo por un distrito para representar á su Estado en el Congreso de la Union conforme á la ley,

tiene derecho á que se le admita como tal diputado en la representacion nacional. Si los demás diputados le niegan de hecho éste derecho; si una resolucion de la Cámara reprueba su título ó credencial, haciendo esto con manifiesta violacion de la ley, parece evidente que se ha vulnerado por un acto del poder legislativo, la garantía que la ley aseguraba al diputado legalmente electo. Pero ésta violacion será reparable por medio del juicio de amparo. Ocurrá el diputado en cuya persona se ha violado, por medio de una reprobacion indebida, el derecho que la ley le garantiza para formar parte de la asamblea nacional, al juez de Distrito, solicitando amparo contra los efectos de aquella providencia. ¿El juez de Distrito deberá examinar el título del quejoso, la acta de su eleccion, y verificar las condiciones legales de su elegibilidad? ¿Amparará al quejoso, declarando que la justicia de la Union lo protege contra la resolucion del Congreso? ¿Revisará ésta resolucion, confirmando ó revocándola, segun crea justo?

Esto mismo puede preguntarse respecto de la violacion de otra clase de derechos ó garantías. Así, el padre, el esposo, el tutor, pueden ver violados los derechos que la ley les confiere, sobre sus hijos, sus mujeres ó sus pupilos, por algun acto de la autoridad; pero estas violaciones, reparables por medio de recursos que la ley proporciona, no lo son por medio del recurso de amparo; porque las garantías violadas no importan derechos del hombre, sino derechos civiles ó de familia, creaciones de la ley comun, cuyo goce está garantizado tambien por medios ó recursos comunes. Si no fuera así, habria que reconocer que toda injusticia, que todo acto de autoridad cualquiera que fuese su índole ó naturaleza, estaba bajo la competencia de la autoridad federal de la federacion, pudiendo ser revisado y anulado por ella. Esto nos condujera al establecimiento de un poder en el que habria que reconocer estos dos

caracteres absurdos: la omnipotencia social y la infalibilidad.

No es este ciertamente el poder con que la Constitucion quiso-investir á la Justicia de la Union, encargada, á este respecto, pura y simplemente de mantener incólumes los derechos del hombre. Para desempeñar ésta alta mision, la Justicia Federal no tiene que descender al exámen de las difíciles y complicadas cuestiones de derecho que en el órden judicial exigen para su acertada resolusion, conocimientos especiales que forman la aptitud legal de los legistas ó jurisconsultos. El sentido recto de hombres prácticos, concedores de la ley fundamental, basta para hacer la apreciacion jurídica que importa la concesion ó la denegacion del amparo. Para discernir si en un caso dado se vulnera por un acto ó por una ley un derecho del hombre, no es necesario examinar cuestiones áridas y delicadas de legislacion y jurisprudencia; basta precisar el derecho violado, y el acto ó ley que lo vulnera. Justificados estos extremos, procede el amparo, porque ante todo, hay que mantener al quejoso en el goce de sus derechos, que tiene independientemente de toda creacion de la ley civil y de la ley política; derechos que ésta última reconoce y acata, como patrimonio comun de la humanidad.

Ya se comprende que profesando el que suscribe estos principios que forman su conviccion mas íntima y profunda, no puede dar su aprobacion á los actos que ejecutó el juez propietario del Distrito de Oaxaca, en el recurso de amparo que algunas personas promovieron ante él, con el carácter de diputados á la Legislatura del Estado.

Cualquiera que sea el aspecto bajo que se considere la cuestion que aquellas personas sometieron á la decision del juzgado de Distrito, parece evidente que aquella cuestion no puede ser sustancialmente otra, que la relativa á la representacion legal como Legislatura del Estado, que pretendia

tener cada una de las fracciones en que se dividió este cuerpo. Esta cuestion, puramente política, y que afectaba íntimamente al régimen interior del Estado, era y debia ser extraña á la autoridad judicial de la Federacion. Por lo mismo, el juez de Distrito no debió dar entrada al recurso promovido, cuyos fundamentos se hacen consistir en la calidad de diputados que tienen los quejosos, y en la ilegitimidad de los individuos que, con el carácter de diputacion permanente, convocaban al Congreso del Estado á sesiones extraordinarias.

Pero se dirá, que el decreto de convocacion, excluia de la representacion del Estado á los diputados quejosos, y anunciaba que iban á ser juzgados por su supuesto delito de usurpacion de facultades ajenas.

Si, como creen los diputados que promovieron el recurso de amparo, la supuesta diputacion permanente, no tenia legalmente este carácter; si á su juicio no podia convocar á la Legislatura á sesiones extraordinarias, porque ésta se habia instalado legítimamente el 16 de Setiembre, en cuyo día, con arreglo á la Constitucion del Estado, habia abierto el período respectivo de sus sesiones ordinarias, ¿cómo pretender que en aquella convocatoria debian estar comprendidos los peticionarios? ¿Cómo considerar su exclusion como un agravio á sus legítimos derechos?

Por otra parte, si suponemos que la diputacion permanente tenia legalmente este carácter, y que en desempeño de atribuciones legítimas expedía el decreto de convocacion, parece claro que la exclusion hecha de los quejosos, importa un agravio á sus derechos como diputados. La Legislatura únicamente y no la diputacion permanente podría, por medio de un veredicto, declararlos culpables, y suspenderlos en el ejercicio de sus funciones legislativas. Así, pues, el decreto de convocacion, vulnera en las personas de los diputados excluidos, un derecho legítimo é incontrovertible, y ataca una garantía que la Constitucion del

Estado les asegura; pero ésta garantía es puramente política, y su violación, que es la de un derecho que los quejosos tienen, no como hombres, sino como diputados, no es reparable por el recurso de amparo, limitado, como antes he dicho, á proteger los derechos del hombre.

La circunstancia de anunciarse en la convocatoria, que iba á juzgarse á los diputados excluidos por un supuesto delito oficial, tampoco puede considerarse como fundamento bastante para la procedencia legal del recurso de amparo. En el dictámen que la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad en el acuerdo del día 2 de Octubre último, se dijo á este respecto: «Si los diputados convocados, ya reunidos y con el carácter de Legislatura, juzgan á los acusados, los declaran culpables, ó los condenan á alguna pena, podrá herirse con estos procedimientos una garantía individual, no del cuerpo político que se llama Legislatura del Estado, sino de cada uno de los individuos juzgados ó condenados: cada uno de ellos separadamente ó reunidos, pero siempre representando su derecho individual, podía implorar el amparo de la Justicia de la Unión, siendo entonces ocasión de examinar aunque por incidencia, los títulos de la competencia legal de la autoridad, para el único efecto de apreciar la validez de sus resoluciones, en lo que afecten á la garantía ó derecho violado; pero lo repetimos, el simple anuncio de que va á procederse, no viola alguna garantía que por nuestra Constitución esté bajo la protección de la Justicia de la Federación.»

De lo expuesto, se deduce, que el juez propietario de Distrito de Oaxaca, obró ilegalmente; primero: dando entrada al recurso de amparo ante el promovido; segundo: ordenando la suspensión de la providencia reclamada. Estos actos afectan su responsabilidad oficial, con arreglo al art. 25 de la ley de 20 de Enero de 1869, que dice: que son causa de reponsabilidad,

la admisión ó no admisión del recurso de amparo, decretar ó no decretar la suspensión del acto reclamado, y la concesión ó denegación del amparo, contra los preceptos de la ley.

Por lo que respecta á la responsabilidad contraída por el juez primero suplente de Distrito, el fiscal cree excusada toda demostración. El recurso de amparo promovido ante aquel contra las providencias del juez propietario, es enteramente inadmisibile ó improcedente. Dicho funcionario, no pudo erigirse en Juzgado de Distrito, y carecía de toda jurisdicción, que la ley no le confiere, sino en casos determinados. En el dictámen á que antes me he referido, se patentiza el absurdo de semejante procedimiento, y la necesidad de aplicar un correctivo eficaz á los abusos de esta especie.

En vista de estas consideraciones, el fiscal debería concluir pidiendo á la Sala la revocación del auto del Tribunal de Circuito que está á revisión; pero obran en su espíritu, en sentido contrario, las consideraciones siguientes:

1ª Habiendo cesado el conflicto que tuvo lugar en el Estado de Oaxaca, con el que tan fuertemente se ligan los actos de los jueces acusados, parece conveniente que no se mantengan, con procedimientos de esta especie, los últimos restos de la discordia política que amenazó perturbar la paz pública en aquella parte interesante de la Federación.

2ª No hay dato alguno para presumir con fundamento, que algun motivo innoble y criminal haya determinado la conducta oficial de los acusados.

3ª Si los jueces acusados se afectaron de las pasiones políticas que dividieron á los partidos contendientes, hay que tener en cuenta que en las capitales de los Estados en donde las cuestiones políticas se agitan mas terriblemente, haciendo sentir su influencia en todos los círculos de la sociedad, es muy difícil que los jueces se mantengan perfectamente extraños á la agitación general, y

muy fácil que, aun sin apercibirse de ello, y contra su voluntad é intencion, se dejen afectar por esa clase de cuestiones.

4^a Si, por regla general, conforme á la ley de responsabilidad, no debe molestar á los jueces por la mala inteligencia de las leyes, y por los errores que á este respecto cometan, esta consideracion obra mas poderosamente respecto de la ley de amparo, institucion nueva que no adquirirá su perfecto desarrollo, sino cuando, pasado mucho tiempo, la jurisprudencia de los tribunales establezca su inteligencia práctica, sin las dificultades, vacilaciones y dudas que actualmente tiene.

En virtud de estas consideraciones, y sin que el fiscal dé su asentimiento á los fundamentos que el Tribunal de Circuito hace valer en su auto de 7 de Enero último, el fiscal pide á la Sala, que sirviéndose confirmar dicho auto en su parte resolutive, que levante la suspension impuesta á los jueces acusados, ordene que se haga á éstos el mas serio extrañamiento, apercibiéndoles que si en lo sucesivo reinciden en faltas de esta naturaleza, se procederá con toda severidad á lo que, conforme á las leyes, hubiere lugar.—*Lozano.*

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 15 de 1875.

Vistas estas diligencias practicadas en el Tribunal de Circuito de Puebla, por disposicion que dictó el C. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en uso de la atribucion que consigna la frac. 7^a art. 2^o cap. 3^o del reglamento, teniendo presente el dictamen de la comision respectiva aprobado en Tribunal pleno, por lo que se mandó suspender en el ejercicio de sus funciones, á los jueces propietario y primer suplente del Juzgado de Distrito de Oaxaca, Lics.

D. Pedro Pardo y D. Juan Z. Esguerra, por sus procedimientos en los recursos de amparo que ante ellos promovieron los diputados de la Legislatura de dicho Estado, que divididos en dos fracciones, pretendieron formar respectivamente los unos con exclusion de los otros, el poder Legislativo del Estado. Visto el auto promovido con fecha 7 de Enero último por el Tribunal de Circuito, que mandó levantar la suspension impuesta á los jueces expresados; el recurso de apelacion que de este auto interpuso el Promotor fiscal, viniendo tales diligencias para su revision en grado á esta sala, que las ha continuado con audiencia del Ministerio público, y la de los interesados, que renunciaron su vista y se han dado por citados para la resolucion que corresponda, y

Considerando: que en todas las constancias á que se refieren estas diligencias, aparece: que los jueces propietario y primer suplente del Juzgado de Distrito de Oaxaca, extralimitaron las facultades que en su caso les confiere la ley de 20 de Enero de 1869, ejecutando actos que no deben aprobarse, atendida la naturaleza propia del recurso de amparo y la calidad de cuerpo político inherente á cada una de las fracciones de la Legislatura del Estado, que ante ellos promovieron contra ciertas providencias ó actos que no violaban las garantías individuales que consigna la Constitucion de la República en el tit. 1^o sobre los derechos del hombre.

Considerando: que si bien es cierto y en dichas constancias aparece demostrado: que los repetidos jueces merecieron la suspension que se les impuso, y se debería por lo mismo revocar el auto citado del Tribunal de Circuito, esta sala no obstante, acepta en todas sus partes las siguientes conclusiones del pedimento fiscal.

1^a Habiendo cesado el conflicto que tuvo lugar en el Estado de Oaxaca, con el que tan intimamente se ligan los actos de

los jueces acusados, parece conveniente que no se mantengan con procedimientos de esta especie, los últimos restos de la discordia política que amenazó perturbar la paz pública en aquella parte interesante de la Federación.

2º No hay dato alguno para presumir fundamento que alguna motivo innoble y criminal haya determinado la conducta oficial de los acusados.

3º Si los jueces acusados se afectaron de las pasiones políticas que dividieron á los partidos contendientes, hay que tener en cuenta, que en las capitales de los Estados en donde las cuestiones políticas se agitan mas terriblemente haciendo sentir su influencia en todos los círculos de la sociedad, es muy difícil que los jueces se mantengan perfectamente extraños á la agitación general, y muy fácil que, aun sin apercibirse de ello y contra su voluntad é intencion, se dejen afectar por esa clase de cuestiones.

4º Si por regla general conforme á la ley de responsabilidad, no debe molestarlo á los jueces por la mala inteligencia de las leyes, y por los errores que á este respecto cometan, esta consideracion obra mas poderosamente respecto de la ley de amparo, institucion nueva que no adquirirá su perfecto desarrollo, sino cuando pasado mucho tiempo la jurisprudencia de los Tribunales establezca su inteligencia práctica, sin las dificultades, vacilaciones y dudas que actualmente tienen.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala, sin dar su asentimiento á los fundamentos en que se apoyó el Tribunal de Circuito para dictar su repetido auto de 7 de Enero último, decreta de conformidad con el pedimento fiscal:

1º Que es de confirmarse y se confirma el citada auto, en la parte resolutive que

levantó la suspension impuesta á los jueces acusados.

2º Se hace á éstos el mas serio extrañamiento, apercibiéndolos que si en lo sucesivo reinciden en faltas de esta naturaleza, se procederá con toda severidad á lo que haya lugar conforme á las leyes.

Hágase saber, devolviéndose las diligencias respectivas al juzgado de su origen, con copia certificada de este auto, y archivándose á su vez el Toca.—*Ignacio Ramirez.*—Una rúbrica.—*Luis Velazquez.*—Una rúbrica.—*Justo Sierra,* secretario.—Una rúbrica.

Son copias que certifico. México, E. Bre-ro 26 de 1875.—Por el O. Secretario, *Manuel Hernandez Villareal,* Oficial mayor.

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Yucatan, sobre comiso de once bullos de Mercancías que estaban ocultos en el rancho llamado Zuculá.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

En la Ciudad de Mérida, á 1º de Junio de 1874 años, hallándose en audiencia pública el C. Lic. Yanuario Manzanilla, Juez de Distrito de este Estado, le di cuenta con estos autos de juicio de comiso seguido contra el vapor español «Lola» y sus efectos; y habiendo visto en ellos las diligencias previas al juicio verbal; las actas de éste; lo alegado en él; la citacion para sentencia; los documentos agregados para mejor proveer, con cuanto mas ver y tener presente convino:

Considerando: Que despues de anclar el vapor español «Lola» en el puerto del Progreso, y de hacer sus operaciones de des-